

Capítulo VI

LA RAZÓN EXTRAVIADA: LA CRÍTICA NEOLIBERAL Y EL ESTADO EN LOS CAPITALISMOS CONTEMPORÁNEOS

I. PLANTEAMIENTO INICIAL: ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La discusión en torno al papel de los gastos fiscales y el “tamaño” del Estado congruente con las actuales condiciones de América Latina ha cobrado una importancia y una urgencia excepcionales. Las razones son varias: por una parte, la gravedad de la crisis capitalista que, iniciada a comienzos de los setenta, no muestra todavía signos de genuina resolución. Esto ha estimulado un verdadero alud de críticas en contra de lo que ahora se considera un excesivo intervencionismo estatal, la mayoría de las cuales han sido articuladas recurriendo a los postulados clásicos de la teoría liberal. Dado que la crisis ha golpeado muy duramente a los países de la región no es de extrañarse que el discurso anti-estadista de los centros haya ganado rápida difusión en América Latina.

El cuestionamiento al Estado –convertido en una verdadera *bête noire* de la crítica neoliberal– surge además en un momento muy particular. En efecto, luego de una prolongada historia de dictadura y terrorismo nuestras sociedades están procurando consolidar sus recientes y agónicos logros democráticos en el marco de un malestar económico cuya severidad es peor que la que azotó a la región en la década del treinta. Por lo tanto, estos países enfrentan un doble y titánico esfuerzo: superar la crisis y construir la democracia, y para ello se requiere, ineludiblemente, someter la cuestión del Estado a un nuevo examen¹. Y esto es así porque, más allá de las opciones filosófico-políticas, los proyectos de los actores sociales para enfrentar la crisis y los desafíos de la consolidación democrática actualizan el debate sobre ciertas “premisas silenciosas” –en este caso qué hacer con el Estado– que en épocas de cambio adquieren una sorprendente resonancia.

1. Hemos planteado, hace ya algunos años, ciertas reflexiones sobre la relación entre capitalismo y democracia en el caso latinoamericano que todavía hoy nos parecen pertinentes a la luz de la crisis actual. Véase nuestro “Entre Hobbes y Friedman: liberalismo económico y despotismo burgués en América Latina”, en *Cuadernos Políticos*, N° 23, México, enero-marzo de 1980, pp. 45-64 (incorporado en este volumen). Una elaboración más reciente sobre este tema puede verse en Perry Anderson, “Democracia y dictadura en América Latina en la década del setenta”, incluido en una recopilación hecha por Cuadernos del Sur de sus artículos más recientes y publicada bajo el título de *Democracia y socialismo. La lucha democrática desde una perspectiva socialista*, Buenos Aires, Tierra del Fuego, 1988, pp. 43-66.

La derecha, fiel a su tradición, ha elegido el camino fácil de satanizar al adversario, en este caso al Estado. Así como antes recomendaba sin mayores sutilezas la aniquilación de sus oponentes hoy propicia con suficiencia lo que le manda su egoísmo de clase: el desmantelamiento del sector público. En la izquierda, tal vez debido a que objetivamente se encuentra a la defensiva y en parte porque hemos heredado una cierta “estadolatría” que es por completo ajena al argumento económico y político que brota de la tradición marxista, prevalece una actitud de cerrada defensa del Estado. Si bien esto es en principio acertado, especialmente porque en las sociedades capitalistas más que en ninguna otra vale el *dictum* hegeliano según el cual aquél es la esfera superior de la eticidad y la justicia, muy a menudo esta postura nos ha impedido identificar a tiempo sus problemas, sus deformaciones burocráticas y sus rasgos opresivos. Sobre todo, ha frustrado la posibilidad de pensar en reformarlo; la confiada espera en la revolución hizo que nos quedáramos sin política para la coyuntura. La derecha capitalizó notablemente la disconformidad y las protestas de los sectores populares ante una institución cuyo funcionamiento –no sólo en la Argentina sino en toda América Latina– deja mucho que desear.

Existe, sin embargo, una segunda vertiente que nos permite comprender más acabadamente la actualidad de esta fobia doctrinaria antiestatista: el auge de las ideologías neoconservadoras, que desde el advenimiento de la administración Reagan han ejercido un rotundo impacto sobre las sociedades latinoamericanas. La creciente hegemonía ideológica de esta corriente de pensamiento ha producido, entre otras cosas, un radical desplazamiento de los ejes del debate social y político en esta parte del planeta. Nuevos temas y prioridades constituyen la agenda de un neoliberalismo poseído por un fervor religioso, que lo impulsa a destruir el Estado precisamente cuando se está avanzando por el camino de la democracia, y a exaltar simultáneamente al mercado como el último garante de la libertad y el progreso de nuestras sociedades².

La fórmula del desarrollo económico latinoamericano desde los años de la Segunda Guerra Mundial asignaba al Estado un papel esencial. Fue Raúl Prebisch quien “reinventó” a Keynes en Latinoamérica –en un proceso creativo cuyos influjos se han dejado sentir durante casi medio siglo– y estableció los criterios orientadores de los esfuerzos en pro del desarrollo realizados desde entonces. Sin embargo, su insistencia en la planificación, el papel empresario del estado y las bondades de una política económica que regulara el funcionamiento de las principales variables del sistema cayó en desgracia ante la crisis de los años setenta y lo que se ha dado en llamar “el retorno de la ortodoxia”. Los diversos experimentos neoliberales puestos en marcha en la región en los últimos años –casi siempre tutelados por dictaduras militares poco afectas a otros componentes del liberalis-

2. Nos hemos ocupado de este tema en nuestro “La crisis norteamericana y la racionalidad neoconservadora”, *Cuadernos Semestrales*, N° 9, CIDE, México, primer semestre de 1981.

mo, como la tolerancia, el pluralismo y los derechos humanos, por ejemplo– han dejado una fuerte impronta, tematizada en su énfasis en el mercado, la iniciativa privada y la desregulación de la economía. En otras palabras, el colapso del keynesianismo y del “sentido común” creado sobre sus premisas ha dejado un enorme vacío por el cual se han colado las propuestas neoliberales³.

Este proceso de descomposición teórica y práctica del keynesianismo –impulsado desde principios de los setenta en los capitalismos maduros por el inédito enigma planteado por la coexistencia de la inflación con la recesión– dejó al desnudo los límites de las enseñanzas económicas de Keynes⁴. En síntesis: la profundidad de la crisis, agravada de modo extraordinario en nuestro continente por la sangría financiera sin precedentes ocasionada por la deuda externa, los desafíos de la redemocratización y, por último, el nuevo clima ideológico mundial, dominado por el paradigma neoconservador, apresuraron la búsqueda de soluciones fundadas en las supuestas virtudes del mercado. El Estado, que desde los años treinta había sido un medio idóneo para encarar la crisis, fue ideológicamente convertido en el “chivo expiatorio” y concebido como el factor que la origina. Antes, en los aciagos años treinta, aquél había sido parte de la solución; ahora ha pasado a ser –en las versiones más ululantes del neoliberalismo– la totalidad del problema⁵.

A este marco económico e ideológico, sucintamente descripto, es preciso añadir ciertos antecedentes referidos al cuadro político en el cual se produce la virulenta resurgencia del liberalismo. América Latina se encuentra en los difícilísimos tramos iniciales de una nueva onda redemocratizadora, estimulada por la bancarrota de las dictaduras militares que, en mayor o menor grado, fueron incapaces de estabilizar un modelo de dominación previsible y confiable para enfrentar la crisis⁶. En estas condiciones, los frágiles experimentos de transición democrática deben responder a una impresionante “explosión de demandas” originadas en las postergaciones y privaciones sufridas por las grandes mayorías nacionales bajo dictaduras militares o gobiernos derechistas, que inspiraron sus políticas públicas en los cánones del neoliberalismo. Como es bien sabido, los resultados de estos ensayos ortodoxos fueron calamitosos desde el punto de vista de la justicia y la equidad sociales, y las jóvenes democracias no pueden –tampoco deberían– ha-

3. Cf. el número monográfico de *Pensamiento Iberoamericano*, dedicado precisamente a este tema, N° 1, Madrid, enero-junio de 1982.

4. Sobre el tema véase Robert Skidelsky (comp.), *The end of the Keynesian era*, Londres, MacMillan Press, 1977.

5. Cf. por ejemplo los trabajos de Hernando de Soto, *El otro sendero. La revolución informal*, Perú, El Barranco, 1986; FIEL, *El Fracaso del Estatismo: Una propuesta para la reforma del sector público argentino*, Buenos Aires, Sudamericana Planeta, 1987; Faustino Fernández Sasso, *El Estado y Yo, por Juan García (Taxista)*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988.

6. Cf. Ruy Mauro Marini, “La lucha por la democracia en América Latina”, en *Cuadernos Políticos*, N° 44, México, julio-setiembre de 1985, pp. 3-12.

cer oídos sordos a las demandas de la población⁷. Dada la completa inoperancia de los mecanismos del mercado para responder a las necesidades más elementales de la sociedad civil es necesaria una amplia y eficaz intervención estatal. Hay dos razones por las cuales el Estado deberá tratar de satisfacer, al menos parcialmente, las exigencias de la ciudadanía: en primer lugar porque sus exigencias son justas, máxime si se tienen en cuenta los padecimientos ocasionados por el auge del “capitalismo salvaje” en la región; segundo, porque sólo el estado puede resolver un problema crucial de toda transición: la construcción de una nueva legitimidad democrática, algo impensable al margen de eso que se denomina *governmental performance* y que para sociedades tan carenciadas como las nuestras requiere inevitablemente mantener un significativo gasto social.

En consecuencia, la problemática del Estado asistencialista y el menú de prestaciones sociales que se supone debe brindar a la población tienen implicaciones que exceden con creces el debate más restringido de la teoría económica. Un análisis que pretenda estimar costos y beneficios de diferentes políticas sobre la base de un modelo de “elección racional” es incapaz de capturar todas las múltiples dimensiones incorporadas al fenómeno del intervencionismo estatal, cuyas raíces son mucho más fuertes de lo que suelen suponer sus enconados adversarios. No hay ninguna razón económica, política o filosófica por la cual deba aceptarse la bárbara pretensión del neoliberalismo de reducir el Estado a una empresa. Tamaño disparate sólo puede ser producto del ofuscamiento que el interés ejerce sobre la inteligencia, pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que ambas instituciones cumplen las mismas tareas y se desempeñan con arreglo a los mismos valores. Por eso no está de más recordar que el auge del neoliberalismo no es tan sólo una respuesta técnica surgida de la revalorización de la herencia teórica de la escuela austríaca y del pensamiento de Adam Smith; es también una propuesta que contiene, en diferentes grados de elaboración, una teoría política sobre la organización del Estado, su naturaleza y funciones –lo cual incluye el tema, crucial, del intervencionismo y la planificación– y sobre el papel que la ciudadanía, y en especial las clases populares, pueden desempeñar en su seno.

Como resultado de todo lo anterior es preciso tener en cuenta que más allá de sus insanables limitaciones teóricas y de sus gruesas inexactitudes empíricas la ofensiva neoconservadora ha “impuesto” el tema del Estado sin discusiones. Su erróneo diagnóstico y su interesada propuesta flaquean sin contrapesos en el ámbito latinoamericano. Su hegemonía es absoluta, y se ha transformado en un nuevo sentido común que permea a la sociedad civil, conquista los partidos políticos y –gracias a su control de los grandes medios de comunicación de masas– satura

7. Véanse los artículos de Aldo Ferrer, “Monetarismo en el Cono Sur: el caso argentino”; José Serra, “El debate sobre política económica en Brasil”; Norberto González, “Ortodoxia y apertura en América Latina: distintos casos y políticas”; Celso Furtado, “Transnacionalização e monetarismo”, todos en *Pensamiento Iberoamericano*, Nº 1, ya citado.

con su discurso privatista y mercantilizador a toda la cultura. En su grosera simplificación los profetas del nuevo credo ocultan cuidadosamente que lo que está en crisis es un Estado capitalista, y que su programa de achicarlo, redimensionarlo, privatizarlo –eliminando, además, sus capacidades intervencionistas y reguladoras– reposa sobre una maniquea dualidad que no resiste el menor esfuerzo analítico: un sano cuerpo capitalista estaría siendo oprimido y frustrado en sus potencialidades de desarrollo por un aparato hipertrofiado, deficitario e ineficiente. Cualquiera sabe que esa simplificación, que se encuentra en la base del planteo doctrinario neoliberal, es irremediabilmente equivocada.

Si hay una crisis del Estado, inocultable tanto en la periferia como en el centro, es porque el capitalismo como modo de producción está en crisis. Son los graves problemas que aquejan a este régimen social los que han provocado la obsolescencia de la forma estatal que lo caracterizó durante el cuarto de siglo más luminoso de su historia. Es cierto que el capitalismo no se enfrenta a una crisis terminal, como fuera periódicamente profetizada en el seno de la tradición marxista sólo para sufrir renovados desengaños. Pero ¿puede alguien seriamente subestimar la magnitud de los reajustes que están teniendo lugar en el sistema capitalista internacional? No se trata de pronosticar un derrumbe allí donde es evidente que existen todavía suficientes capacidades para sortear los escollos levantados por la coyuntura actual. Pero ¿cómo ignorar que estamos en presencia de una serie de transformaciones que plantean sombríos interrogantes acerca de la estabilidad del sistema en el mediano plazo? Piénsese tan sólo en lo que significa la hegemonía del capital financiero a escala mundial y su inevitable contraparte, la “resurrección del rentista”, ese sujeto que Keynes había recomendado liquidar mediante una verdadera “eutanasia” con el propósito de purgar a la economía capitalista de sus elementos parasitarios y especulativos. O la gravedad que reviste el hecho de que los Estados Unidos, gracias a las sabias y acertadas políticas neoliberales, se haya transformado en escasos seis años... ¡del primer acreedor al primer deudor mundial! No hace falta ser un premio Nobel en Economía para inferir que un orden económico internacional cuya potencia integradora exhibe tales flaquezas difícilmente pueda despertar la confianza de los dueños del capital y estructurar un nuevo orden mundial en reemplazo del que fuera creado en Bretton Woods en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que lo anterior se relaciona con el hecho, poco tranquilizante por cierto, de que los dos grandes derrotados por los Estados Unidos en la contienda –Alemania y Japón– se han constituido en verdaderos gigantes económicos pero siguen siendo pigmeos en lo tocante a los aspectos estratégicos y militares de su inserción internacional, todo lo cual agrega nuevos desequilibrios al sistema en su conjunto. Piénsese, por último y para no prolongar excesivamente un recuento que podría extenderse mucho más, en las implicaciones de una Europa unificada –bautizada como *Fortress Europe* por los atribulados norteamericanos– y en los crecientes obstáculos con que tropieza el comercio internacional, y se podrá obtener un panorama realista de lo delicado de la

situación actual. Ante estas realidades conviene replantarse la pregunta: ¿qué es lo que está en crisis: el Estado o el capitalismo?

En el caso latinoamericano, como si lo anterior no fuera suficiente, es preciso considerar además antes de evaluar los méritos de las propuestas neoliberales ciertas particularidades que afectan a la región. Este encuadre estructural es fundamental para evaluar la pertinencia del argumento neoliberal y ponderar, sobre bases firmes, la naturaleza de su proyecto y las intenciones de sus argumentos.

II. EL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS EN LOS OCHENTA

Según los estudios realizados por la CEPAL, la evolución del producto interno bruto por habitante, medida en valores constantes (dólares norteamericanos de 1980) para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe⁸ registró una sensible caída desde los inicios de la década de los ochenta, agravándose aun más luego del estallido de la crisis de la deuda en 1982. Si tomamos las cifras de 1980 y las transformamos en base 100 tenemos que hacia 1983 el PIB per cápita de la región había descendido al 90,5% de los valores vigentes en 1980; al año siguiente se registró una levisima mejoría, al igual que en 1985, pero el valor del índice llegó apenas al 92,9%. En suma, transcurrido un lustro el PIB era todavía casi un 7% inferior al de 1980⁹.

Observando con un poco más de detenimiento se comprueba que de los países que hemos considerado tan sólo Brasil exhibía, en 1985, cifras del PIB por habitante superiores a las de 1980. La excepcionalidad del caso brasileño no oculta, sin embargo, el hecho de que si se toman las cifras del primer quinquenio de la década de los ochenta se comprueba también en ese país una notable desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. Una visión más completa se puede obtener consultando las siguientes cifras.

8. Los países comprendidos son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago.

9. Cf. *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*, CEPAL, Santiago, Chile, 1987, pp. 148-149.

CUADRO 1
**PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y PER CÁPITA, POR PAÍSES SELECCIONADOS
 ENTRE 1960 Y 1986 (EN PORCENTAJES)**

I) Proporción del PBI de países seleccionados sobre el conjunto de América Latina

Proporción del PBI regional Promedios			
País	1960-69	1970-79	1980-86*
Argentina	14,8	12,0	9,1
Bolivia	1,1	1,0	0,8
Brasil	29,9	34,6	38,3
Colombia	4,5	4,4	4,5
Chile	5,4	3,9	3,4
Ecuador	1,2	1,4	1,5
México	20,8	22,3	24,4
Perú	4,1	3,6	3,0
Uruguay	1,8	1,2	1,0
Venezuela	7,9	7,5	6,3

II) Tasa de crecimiento promedio anual del PIB por períodos

Tasas de crecimiento Promedios			
País	1961-70	1971-80	1961-80
Argentina	4,1	2,6	3,3
Bolivia	5,0	4,5	4,7
Brasil	5,4	8,7	7,0
Colombia	5,2	5,5	5,4
Chile	4,2	2,5	3,4
Ecuador	4,9	8,9	6,9
México	7,0	6,6	6,8
Perú	5,2	3,5	4,3
Uruguay	1,5	3,0	2,3
Venezuela	6,1	4,1	5,1
América Latina	5,4	6,1	5,8

III) Tasas medias de crecimiento anual del PIB

País	1981	1982	1983	1984	1985	1986*
Argentina	-6,8	-4,6	2,8	2,6	-4,5	5,7
Bolivia	0,3	-2,8	-6,6	-0,9	-1,7	-2,9
Brasil	-3,3	0,9	-2,5	5,7	8,3	8,2
Colombia	2,3	0,9	1,6	3,4	2,4	5,1
Chile	5,5	-14,1	-0,7	6,3	2,4	5,5
Ecuador	3,9	1,2	-2,8	4,0	3,8	1,7
México	7,9	-0,5	-5,3	3,7	2,8	-3,8
Perú	3,1	0,9	-12,0	4,7	1,9	8,5
Uruguay	1,9	-9,4	-5,9	-1,5	0,0	6,3
Venezuela	-0,3	0,7	-5,6	-1,2	0,1	3,1
A. Latina	0,5	-0,8	-2,9	3,8	3,7	3,8

IV) Tasas medias de crecimiento del PIB per cápita

País	Promedios		Anual		
	1961-80	1981-83	1984	1985	1986*
Argentina	1,8	-4,6	0,9	-6,0	4,1
Bolivia	2,0	-5,7	-3,6	-4,4	-5,5
Brasil	4,4	-4,1	3,1	5,6	5,6
Colombia	2,9	0,3	2,1	1,0	3,6
Chile	1,4	-5,1	4,6	0,7	3,9
Ecuador	3,7	-2,3	0,8	0,8	-1,1
México	3,7	-2,3	0,9	0,0	-6,4
Perú	1,7	-5,4	2,1	-0,6	5,8
Uruguay	1,7	-5,0	-1,9	-0,5	6,3
Venezuela	1,8	-4,6	-3,9	-2,8	-0,1
A. Latina	3,2	-3,4	1,4	1,3	1,4

*Estimación preliminar.

Fuente: BID en base a estadísticas de los países miembros. Tomado de BID, *Progreso económico y social en América Latina, Informe 1987*, Washington D.C., p. 19.

Como se demuestra más arriba, la tasa de crecimiento del conjunto de América Latina y el Caribe registra un desplome espectacular en esta década. Si la tasa anual media de crecimiento del PIB había sido de 5,8% durante los sesenta y setenta, en 1981 ésta cae al 0,5% y luego comienza a decrecer a -0,8% y -2,9% en 1982 y 1983. A partir de 1984 se recupera una senda de crecimiento –fluctuante en torno al 3,8% anual– pero que se relativiza bastante si se compara esta cifra

con el crecimiento poblacional, a resultas de lo cual llegaríamos a una modesta tasa de crecimiento per cápita del orden del 1,3% anual. Para comprender lo que esto significa bastaría recordar que ese guarismo se ubica por debajo de la mitad de las tasas históricas de crecimiento de la región en la posguerra.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras son promedios sobre los cuales influye enormemente el notable comportamiento de la economía brasileña, cuya gravitación sobre el conjunto latinoamericano se ha acrecentado espectacularmente y que a mediados de la década de los ochenta equivale al 38,3% del PBI de la región. Si procediéramos a un análisis más desagregado, que no es el objetivo de este trabajo, podríamos constatar el cuadro francamente calamitoso en que se debaten algunos países y la profundidad del proceso objetivo de empobrecimiento sufrido por amplios sectores dentro de ellos.

III. TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS REALES

En todo caso, la experiencia brasileña contiene ciertas facetas desagradables que obligan a matizar el juicio sobre la *performance* de su economía. En efecto, los datos disponibles relativos a la distribución del ingreso señalan, por ejemplo, que la estructura prevaleciente en ese país es una de las más regresivas del mundo. El caso mexicano –que en su época también fue considerado un milagro económico, al igual que la Argentina de los años del Centenario– se inscribe, si bien con características un poco menos agudas, dentro de la misma tendencia manifestada en el Brasil. A la hora de evaluar el éxito de un modelo de desarrollo no deja de ser un signo preocupante que, entre 1960 y 1980, el 50% más pobre de la población brasileña haya contemplado cómo su participación en la nueva riqueza creada en el país descendía del 17,4% al 12,6% del PIB, en una época en que publicistas, ideólogos y empresarios no cesaban de cantar loas al milagro económico. El reverso de la medalla muestra que el 10% superior pasó de percibir el 39,6% del ingreso nacional en 1960 a disponer del 50,9% veinte años más tarde; entre esos mismos años el 1% de los super-ricos mejoró su situación relativa pasando de percibir el 11,9% del ingreso al 16,9%, es decir, casi un tercio más que el 50% de la población de menos recursos del Brasil¹⁰. Con datos que revelan la presencia de una situación más escandalosa inclusive que la que prevalece en la India, Brasil aparece con la peor estructura de distribución de ingresos en una muestra de diez países recientemente analizada por el Banco Mundial¹¹. Aun en el caso argentino, un país con una tradición de igualdad social muy fuerte, un minucioso estudio de Oscar Altimir llega a conclusiones congruentes con las evidenciadas para el caso brasileño: entre 1961 y 1980 el 40% más pobre pasó de percibir el 17,3% al 14,5% del ingreso nacional, mientras que el decil superior subió del 39%

10. Cf. Fernando H. Cardoso, *A Democracia necessária*, Campinas, Papirus, 1985, p. 90.

11. Citado en Alfred Stepan, *Rethinking military politics. Brazil and the Southern Cone*, Princeton, Princeton University Press, 1988, pp. 124-125.

al 44%¹². Parecería pues recomendable tomar en consideración estos aspectos –esenciales en relación a un tema como el de la justicia– a la hora de calibrar la razonabilidad de las exigencias liberales de “soltar” definitivamente las fuerzas del mercado, toda vez que ellas desdeñan la compleja relación existente entre el funcionamiento de los capitalismos periféricos, las necesidades sociales que reclaman la presencia del Estado asistencialista y las perspectivas de la democracia política en nuestro continente.

Esta precaución es particularmente oportuna si se recuerda que este patrón regresivo de la distribución del ingreso refleja una tendencia generalizada en nuestro continente, y cuya vigencia se ha acentuado considerablemente a partir de la crisis de la deuda y de la implementación de durísimos “programas de ajuste” que golpearon muy fuertemente a los estratos populares de nuestra región y agravaron la injusticia estructural de los capitalismos latinoamericanos. Al respecto, los datos sobre la evolución de los salarios reales son francamente preocupantes, especialmente si se repara que ellos corresponden al período *anterior* al verdadero “apretón” implementado a partir de 1982. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo revela que las tasas anuales de crecimiento de los salarios reales en la década del setenta fueron de -1,8% para Bolivia, 2,2% para México, -2,8% para el Perú, -5,3% para Uruguay y -0,5% para Venezuela¹³. Sin embargo, es de sobras conocido que este deprimente desempeño habría de empeorar sensiblemente en la siguiente década, cuando al compás de las “políticas de ajuste” dictadas por el Fondo Monetario Internacional la mayoría de los países de América Latina recortaron sustancialmente los ingresos de los trabajadores y de los grupos más deprivados de la población. En la tabla siguiente se exponen algunos datos sobre el comportamiento de los salarios reales en la década del ochenta que permiten apreciar la magnitud de la crisis.

CUADRO 2
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS SALARIOS REALES
EN PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA

País	1982	1983	1984	1985	1986*
Argentina	-10,5	29,3	16,0	-14,5	-5,7
Brasil	0,5	-11,4	-14,8	12,2	0,1
Chile	-0,1	-11,0	0,4	-4,4	1,9
México	-9,6	-18,0	-7,4	-1,3	-7,9
Perú	2,2	-16,7	-15,3	-15,7	41,0
Uruguay	-0,3	-20,7	-9,1	14,1	6,7
Venezuela	-0,1	-7,2	-7,6	0,3	n.d.

* Estimación preliminar; n.d.: no disponible.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, *Progreso Económico y Social en América Latina*, Informe 1987, Washington D.C., pp. 228, 262, 290, 358, 392, 424, 432.

12. Oscar Altimir, “Estimaciones de la distribución del ingreso en la Argentina, 1953-1980”, en *Desarrollo Económico*, vol. 25, N° 100, Buenos Aires, enero-marzo de 1986, p. 547.

13. Organización Internacional del Trabajo, *El trabajo en el mundo, I*, Ginebra, OIT, 1984, pp. 222-227.

Las cifras relativas a la tendencia de los salarios reales hablan por sí mismas acerca de los alcances del proceso de pauperización sufrido por vastos sectores de las clases populares latinoamericanas. Es evidente que esta regresión salarial está llamada a tener un profundo impacto, tanto sobre la economía como sobre la política de nuestros países. Pero lo que quisiéramos destacar con estos datos es la magnitud del hiato que divide las necesidades humanas básicas –de crecientes contingentes de la población– de las capacidades efectivas de intervención estatal susceptibles de producir políticas compensatorias o reparadoras de los desequilibrios engendrados por el capitalismo salvaje. Esto podría expresarse muy gráficamente con la metáfora de las tijeras: las demandas generadas en la sociedad civil, las insatisfacciones, las deprivaciones y sufrimientos provocados tanto por la crisis como por los ensayos neoliberales puestos en práctica en la región han dado lugar a un verdadero aluvión de reivindicaciones, facilitadas por otra parte por el clima permisivo de sociedades que reinician su larga marcha hacia la democracia. En esas condiciones, sin embargo, la misma crisis que potencia las renovadas exigencias societales reduce notoriamente las capacidades del Estado para producir las políticas necesarias para resolver, o al menos aliviar, las dificultades aludidas. El resultado es una alarmante acumulación de tensiones que bien podría desembocar en un cuadro de ingobernabilidad generalizada del régimen democrático, su acelerada deslegitimización y su probable desestabilización, con los riesgos de una inesperada reinstalación de gobiernos autoritarios de diverso tipo.

IV. EL IMPACTO DE LA DEUDA EXTERNA

Es evidente que la deuda externa juega un papel de singular importancia en esta configuración, por cuanto la voluminosa cantidad de recursos transferidos a los centros ha contribuido a disminuir sustancialmente las capacidades de intervención de los Estados nacionales. El déficit fiscal adquiere así renovada virulencia, porque no sólo refleja crónicos desequilibrios presupuestarios sino que expresa, asimismo, la sobrecarga fenomenal ocasionada por el nuevo tributo imperial. Los siguientes datos permiten fundamentar adecuadamente nuestra interpretación.

CUADRO 3

DEUDA EXTERNA, EXPORTACIONES Y PRODUCTO BRUTO INTERNO**I) Ratio entre la deuda externa y las exportaciones de bienes**

	Dic. 1980	Dic. 1981	Dic. 1982	Dic. 1983	Dic. 1984	Dic. 1985	Dic. 1986
Argentina	3,4	3,9	5,1	5,8	5,8	5,8	7,5
Bolivia	2,1	2,5	2,8	3,3	4,5	5,2	7,3
Brasil	3,4	3,3	4,3	4,4	3,8	4,0	4,6
Colombia	1,6	2,7	3,2	3,8	3,9	4,0	3,1
Chile	2,4	4,0	4,5	4,5	5,1	5,5	4,6
Ecuador	1,7	2,1	2,3	2,8	2,7	2,5	3,8
México	3,2	3,7	4,0	4,3	3,9	4,4	6,5
Perú	2,5	3,0	3,4	4,1	4,3	4,5	6,1
Uruguay	2,0	2,6	4,2	4,4	5,1	5,7	5,1
Venezuela	1,4	1,4	2,0	2,3	2,1	2,7	4,3

p.: preliminar. Nota: el coeficiente para 1986 se obtuvo al relacionar la deuda global con las exportaciones estimadas oficialmente para 1986.

II) Relación entre la deuda externa y el producto bruto interno (en porcentajes)

	Dic. 1980	Dic. 1981	Dic. 1982	Dic. 1983	Dic. 1984	Dic. 1985	Dic. 1986p
Argentina	38,7	54,0	62,2	70,1	71,2	76,7	79,0
Bolivia	32,4	35,5	36,8	51,5	58,9	62,0	58,8
Brasil	28,6	33,4	36,8	41,9	42,3	38,9	37,2
Colombia	20,9	25,3	29,9	32,6	34,8	37,3	42,0
Chile	47,2	62,7	80,5	82,4	83,9	91,5	80,9
Ecuador	38,0	46,1	47,2	59,9	60,2	56,0	63,3
México	28,7	38,8	45,9	52,9	51,9	52,0	55,6
Perú	43,0	41,6	49,5	60,9	62,5	62,2	63,4
Uruguay	27,2	40,0	47,6	66,0	69,7	72,4	78,5
Venezuela	55,5	60,5	64,7	74,0	76,2	78,7	79,5

p.: preliminar. Nota: los valores se obtienen a partir de relacionar ambas variables en dólares corrientes. Para obtener los datos del PIB, se utilizó el IPES 1986 del BID para el período 1980-1985, estimándose los valores para 1986 sobre la base de información oficial de cada país.

III) Deuda externa por habitante (en dólares corrientes)

	Dic. 1980	Dic. 1981	Dic. 1982	Dic. 1983	Dic. 1984	Dic. 1985	Dic. 1986p
Argentina	956	1.235	1.319	1.509	1.544	1.564	1.655
Bolivia	396	425	401	505	545	546	729
Brasil	576	646	703	756	778	755	778
Colombia	261	317	368	399	431	465	535
Chile	1.012	1.397	1.517	1.518	1.618	1.771	1.619
Ecuador	497	609	600	723	731	738	821
México	732	1.040	1.192	1.265	1.252	1.254	1.257
Perú	575	566	652	701	737	729	773
Uruguay	740	1.068	1.445	1.551	1.577	1.640	1.832
Venezuela	1.907	2.029	2.110	2.218	2.190	2.193	2.115

p.: preliminar. Nota: se elaboró sobre la base de datos poblacionales de carácter oficial.

Fuente: INTAL, Programa de Cooperación Empresarial. Tomado del programa de la Fundación Cidob e ICCI, Foro Integración Latinoamericana, Barcelona, 16-18 de diciembre de 1987, pp. 16-17.

Las tablas precedentes demuestran el carácter vital del problema de la deuda externa latinoamericana, convertida en una verdadera lápida para los esfuerzos de toda una generación. Si atendemos a la *ratio* entre la deuda externa y las exportaciones de bienes comprobamos que –a pesar de la interrupción de los préstamos de la banca acreedora a partir de 1982, los severísimos programas de ajuste fiscal y el enorme esfuerzo exportador realizado por varios gobiernos de la región– no hay un solo país donde la deuda externa haya dejado de crecer muy por encima de las exportaciones. Inclusive el ejemplo de Brasil, sin duda sobresaliente por la agresividad de su ofensiva exportadora, revela la desigual carrera entre estas dos variables. Lo mismo puede decirse en relación al peso de la deuda externa sobre el PBI, que subió en todos los países hasta llegar –como en los casos de la Argentina, Bolivia, Chile Uruguay y Venezuela– a niveles escalofriantes. En resumen: nuestros países deben casi tanto como todo lo que producen en un año, y vastos segmentos de América Latina –no sólo los sectores de menores ingresos sino la antigua pequeña burguesía y las otrora florecientes capas medias de profesionales y técnicos– se encuentran sumidos en un proceso de creciente pauperización. En este continente el problema ya no es la pobreza, sino la pobreza extrema, y la medición de la deuda en términos per cápita revela, desde otro ángulo, los alcances de esta aberración: \$1.655 para la Argentina, \$1.619 para Chile, \$1.257 para México, \$1.832 para Uruguay y \$ 2.115 para Venezuela. La deuda per cápita equivale, en la mayoría de los casos, a una cifra cercana, o a veces mayor, a la que estos países registran como ingreso por habitante.

Es evidente que una situación como ésta es insostenible. América Latina no puede pagar, aun cuando sus grupos dirigentes tengan la voluntad de hacerlo. Sencillamente no hay recursos. A pesar de las significativas remesas de divisas enviadas a los centros –lo que de por sí constituye un absurdo mayúsculo– el volumen de la deuda sigue creciendo en relación a nuestras exportaciones y el PBI. ¿Cómo hacer para pagar? O preguntémoslo, siguiendo la sugerencia de Guillermo O'Donnell, ¿por qué nuestros gobiernos no hacen lo obvio?¹⁴.

La pregunta no es retórica porque, de hecho, América Latina transfirió a los centros la friolera de 203.000 millones de dólares entre 1982 y 1989, y a pesar de ese esfuerzo descomunal –que de haber sido aplicado a programas de desarrollo económico y social hubiera mejorado sustancialmente nuestra actual condición– nos encontramos con que estamos más endeudados que antes y con una hipoteca sobre nuestro futuro que no tiene vías de solución¹⁵. El caso de la Argentina es

14. Véase el excelente artículo de Guillermo O'Donnell, "Deuda externa: ¿Por qué nuestros gobiernos no hacen lo obvio?", en *Revista de la Cepal*, N° 27, Santiago, diciembre de 1985.

15. La deuda externa de la región se incrementó en 101.000 millones de dólares entre esos años. Estos datos están contenidos en un reciente informe del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), cuyas líneas generales acaba de dar a conocer a la prensa. Véase "La deuda latinoamericana y el pago de nunca acabar", en *Página/12*, Buenos Aires, 20 de febrero de 1990, p. 10.

particularmente instructivo en este tema, porque la transición democrática puesta en marcha durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue progresivamente debilitada a causa de la sangría económica originada por la deuda externa. Más allá de los planes y proyectos tendientes a reducir a límites compatibles con el desarrollo nacional el pago de la deuda, lo cierto es que durante los primeros cuatro años de gobierno democrático la Argentina desembolsó por ese concepto la suma de U\$S 10.453 millones, lo que representa nada menos que el 97% del superávit comercial de esos años, el 35% de las exportaciones totales y el 3,5% del PIB del período¹⁶. Como consecuencia de la opción escogida por el gobierno, diversos programas sociales debieron ser recortados, imponiéndose además una estricta política de ajuste que recayó brutalmente sobre los ingresos de las clases y capas populares. Los efectos recesivos de esta política han sido muy grandes, pero más grave aun –y de efecto más retardado y persistente– ha sido el desprestigio que la democracia ha sufrido ante los ojos de las clases subalternas, que han visto cómo bajo ese régimen sus legítimas demandas fueron desoídas. Mientras tanto la llamada “burguesía contratista” se enriquecía gracias a sus relaciones privilegiadas con el Estado, que le permitían embolsar, por la vía de subsidios, exenciones, reembolsos y estímulos de diverso tipo una suma fluctuante de aproximadamente tres mil millones de dólares anuales¹⁷.

V. OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS

La discusión sobre la crisis del Estado asistencialista tiene que ser encuadrada a la luz de estos parámetros porque, en caso contrario, se reduciría a una simple contraposición abstracta de preferencias doctrinarias que poco tienen que ver con la realidad efectiva de las cosas. La ofensiva neoliberal prescinde de estos datos y se apoya en una visión profundamente ideologizada del funcionamiento del capitalismo que ignora el papel central que el Estado juega en el proceso de acumulación. Su retórica antiestatista no se conjuga con la maciza presencia del gasto público y las sutiles pero penetrantes formas de intervención estatal que han caracterizado desde siempre el funcionamiento de los capitalismos realmente existentes.

Y en este terreno hay algo bien claro: el Estado en América Latina se encuentra ante un dilema de hierro. La dilapidación de los esfuerzos y sacrificios en pro del desarrollo realizados durante los últimos veinte años lo obliga o bien a intervenir más, profundizando su perfil intervencionista para aliviar la situación de enormes contingentes populares, o bien a tener que reprimir las protestas “desde abajo”, cavando la fosa de su incipiente proceso de redemocratización.

16. Cf. Alberto Pontoni, “Deuda Externa. Un nuevo rol para el FMI”, en *Página /12*, Buenos Aires, 14 de julio de 1988, p. 9.

17. Cf. Adolfo Canitrot, en EURAL, *Proyectos de Cambio. La izquierda democrática en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad, 1988.

El Estado en América Latina ha jugado tradicionalmente un papel de “colchón anticíclico”, corrigiendo con sus intervenciones el rumbo de la economía y contribuyendo a la revitalización del mercado. Hoy en día se enfrenta con gravísimos problemas para cumplir ese rol, y sus consecuencias se verifican muy fácilmente al analizar el comportamiento de la inversión. Esta, como es bien sabido, está fuertemente impulsada por la iniciativa que toman los gobiernos abriendo el campo para que, recién entonces, se produzcan las inversiones de los agentes privados. Es así que entre 1980 y 1986 el coeficiente de inversión respecto del PIB cayó para el conjunto de los países de la región del 23,9% al 15,8%, y esto a pesar de que el ahorro interno con relación al producto se mantuvo entre el 21,6% y el 22,7% a lo largo de esos años. ¿Qué significa esto? Sencillamente que, en términos constantes, se ha invertido un tercio menos de lo que se acostumbraba a hacer antes de la crisis, reflejándose de este modo el efecto combinado del deterioro de los términos de intercambio y la transferencia de recursos originada en la remesa de utilidades y el pago de la deuda externa¹⁸. En la Argentina las inversiones gubernamentales cayeron del 8,5% al 7,4% del PBI entre 1982 y 1986; en México, para los mismos años, se desplomaron del 10,4% al 5,6% y en Venezuela pasaron del 9,6% al 7,3%; a pesar de estos recortes, el déficit fiscal en la región sigue siendo sumamente elevado y se recomienda entusiastamente recortar aun más los gastos del Estado¹⁹. Por otro lado, la estructura impositiva de los países del área sigue siendo fuertemente regresiva. Sólo así se puede comprender que, en medio de esta crisis, los impuestos a la renta y las utilidades y ganancias del capital como proporción del total de ingresos corrientes del estado hayan descendido, entre 1972 y 1985, en casi todos los países: del 20% al 17,9% en Brasil; del 12,5% al 3,1% en la Argentina y del 36,4% al 24,7% en México²⁰.

VI. ELEMENTOS PARA UNA INTERPRETACIÓN

Vamos a tratar de sintetizar las principales conclusiones: de los antecedentes empíricos examinados se desprende que la propuesta neoliberal de desmantelamiento del Estado Benefactor y reforzamiento de la “magia del mercado” tiene escasa aplicación en el mundo contemporáneo. Sus prescripciones no fueron puestas en práctica ni en el pasado reciente del desarrollo capitalista, con su esplendoroso cuarto de siglo de la posguerra, ni en los años recesivos que le han sucedido. No queremos abrumar al lector con cifras y citas, pero no podemos menos que recurrir a ellos si es que queremos afirmar nuestras conclusiones en el sólido terreno de la evidencia empírica. Estos datos demuestran, a pesar de la vocinglería neoliberal, la persistente importancia del Estado y del gasto social en los capitalismo metropolitanos.

18. CEPAL, “Estadísticas sobre cuentas nacionales”, Santiago, mimeo, 1989.

19. Cf. BID, op. cit., pp. 228, 262, 290, 358, 392, 424, 432.

20. Banco Mundial, *Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1987*, Washington, D.C., 1987, p. 275.

Los datos consignados en el Cuadro 1 del capítulo anterior, relativos al “gasto social” en los países de la OECD entre 1960 y 1981, resumen una tendencia global –es decir, que afecta al conjunto de los países desarrollados independientemente de sus particularidades nacionales– de veinte años de duración que demuestra la solidez del *Welfare State*, el cual, a pesar de hallarse apremiado por una crisis fiscal sin precedentes, no ha dejado de garantizar la prestación de toda una notable gama de servicios sociales que hoy son consustanciales con la democracia burguesa y –nos atreveríamos a decir– casi por completo irreversibles. Es por eso que la gravitación del Estado en los capitalismos avanzados ha proseguido fiel a su inercia histórica, lo cual explica que tanto antes como después del estallido de la crisis la tasa de crecimiento de los gastos sociales se mantuviese por encima de la del crecimiento del PIB.

Las cifras permiten extraer varias conclusiones interesantes. En primer lugar, el gasto social se incrementó entre 1960 y 1981 en todos los países de la OECD, tanto en las siete economías que constituyen el núcleo más avanzado del capitalismo internacional como en el resto de los miembros de la organización. El promedio del gasto social sobre el PBI para “los siete grandes” era de 13,7% en 1960 y ascendió a casi el doble, un 24,8%, en 1981; para el conjunto de la OECD las cifras fueron de 13,1% y 25,6% respectivamente. En segundo término, y esto es más importante aun, el ritmo de crecimiento del gasto social una vez desencadenada la crisis se desaceleró, pero continuó siendo bastante superior al del crecimiento del PBI, con las solas excepciones de Canadá, la República Federal de Alemania y Holanda. En todos los demás países el gasto social siguió incrementándose por encima del producto, incluyendo a Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, mientras que los Estados Unidos equiparaban exactamente ambas tasas en un 3,2% anual.

Hilando más fino se puede comprobar que ni el presidente Ronald Reagan ni la primera ministro Margaret Thatcher cumplieron con sus promesas de efectuar drásticos recortes en los presupuestos fiscales. Si algo se demostró con su gestión es que ni siquiera el más encendido discurso neoliberal pudo resucitar los muertos diligentemente enterrados por Keynes hace más de medio siglo. Los ideólogos y propagandistas de las virtudes del mercado pueden hablar, pero sus palabras se desvanecen en el aire ante la verdad efectiva de las cosas. Si el Estado sigue pesando en la economía es por que la acumulación capitalista se ha “estatificado”, y requiere cada vez más del apoyo de los poderes públicos para sobrevivir. La historia del fenomenal déficit del gobierno norteamericano es demasiado conocida para repetirla una vez más: en 1985 era equivalente al 5,3% del PIB mientras que el del Reino Unido, por su parte, llegaba al 3,1%²¹. ¿Cómo se concilian unos déficits aberrantemente keynesianos con un discurso dogmáticamente neoliberal? Es imposible: entre 1980 y 1983, en plena fase ascendente de la

21. Cf. Banco Mundial..., *Informe*, op. cit., p. 273.

“revolución neoconservadora” del presidente Reagan, el porcentaje de los gastos estatales ascendió del 36% al 39,2% del PIB mientras se le prometía al electorado norteamericano acabar con el *big spending*. Del otro lado del Atlántico la señora Thatcher ofrecía, desde 1978, la misma política: el resultado fue un incremento del gasto estatal del 45,1% al 49,3% del PIB en 1983²². Pese a ello, los representantes del neoliberalismo en América Latina prosiguen impertérritos con su apostolado, medrando con la desinformación orquestada por los ciertos comunicadores y las empresas a las cuales les interesa lucrar con el triunfo de esas ideas.

Para apreciar con más claridad el comportamiento concreto, no el declamado, de los gobiernos durante la década de la crisis (1975-1985) véanse las siguientes cifras.

CUADRO 4
GASTO PÚBLICO POR PAÍSES (EN% DEL PIB)

Países	1975	1985	Tasa de incremento anual medio entre 1975-85
Austria	40,3	50,7	2,32
Bélgica	44,9	54,4	1,94
Canadá	41,2	47,0	1,32
Dinamarca	47,5	59,5	2,28
Finlandia	37,2	41,5	1,10
Francia	42,4	52,4	2,14
Holanda	54,3	60,2	1,04
Italia	43,1	58,4	3,08
Noruega	46,5	48,1	0,34
Reino Unido	46,1	47,8	0,36
Rep. Fed. Alem.	5,6	47,2	0,34
Suecia	51,0	64,5	2,38
Suiza	27,4	30,9	1,21
Estados Unidos	36,2	36,7	0,14

Fuente: José María Maravall, “Las razones del reformismo. Democracia y Política Social”, en *Leviatán*, Nº 35, Madrid, primavera de 1989, p. 33.

El análisis de estas cifras, referidas no sólo al gasto social sino al gasto público, confirma lo que habíamos expresado anteriormente. A pesar de la fervorosa prédica neoliberal se comprueba que todos estos países han incrementado su gasto público desde el estallido de la crisis. A pesar de la necesidad de efectuar durísimos ajustes, proclamada incansablemente en todos los foros económicos internacionales, la realidad es que la expansión del gasto público siguió su curso,

22. Fondo Monetario Internacional, *Government Finance Statistics Yearbook 1983*, Washington, D.C., 1984.

aminorando la marcha en algunos casos (el Reino Unido o los Estados Unidos, por ejemplo) pero nunca revirtiendo la tendencia hacia un peso creciente del Estado sobre el conjunto de la economía.

En segundo término vale la pena subrayar que a pesar de la nueva retórica claramente hegemónica a nivel mundial, la realidad demuestra que siete de los catorce países –que, junto con España y Japón, constituyen el núcleo decisivo de la producción industrial a escala internacional– destinan más del 50% de su PIB al gasto público. La prédica de sus gobernantes, ministros y banqueros, en consecuencia, es incongruente con su práctica concreta en el campo de la política económica, y sería bueno que nuestros dirigentes tomaran nota de esta inconsecuencia.

En tercer lugar nos parece conveniente subrayar los contrastes entre los casos de Italia y el Reino Unido. Mientras la primera aparece como la nueva estrella en la constelación de los países industrializados, el segundo no acierta todavía a redefinir una adecuada estrategia de inserción en el moderno sistema industrial. Ahora bien: el “milagro” italiano se dio en un marco político progresista, signado por el ascenso de las izquierdas –socialistas y comunistas– y por una presión “desde abajo” que elevó el gasto público desde el 43,1% en 1975 al 58,4% en 1985. Es decir, un ascenso de más de 15 puntos como correlato de una estupenda *performance* económica que hizo que el Reino Unido rezagara sus posiciones ante el empuje de la península. A todo esto habría que agregar que, ante la rígida disciplina monetaria impuesta por el gobierno conservador británico, el caso italiano revela un comportamiento que, a primera vista, podría aparecer como irresponsable. En efecto, el déficit fiscal de Italia ha oscilado, en estos últimos años, en torno al 10% del PBI, y esto, lejos de perjudicar el dinamismo del capitalismo italiano, lo ha robustecido considerablemente. La experiencia de este país, en síntesis, sirve para moderar las pretensiones de la ortodoxia monetarista que insiste en señalar que para crecer es preciso achicar el Estado, reducir el gasto público y desregular la economía. Las lecciones de la historia económica reciente proponen una dura réplica a dichas postulaciones.

Por todo lo anterior es que quisiéramos rematar este trabajo haciendo nuestra la tesis central de un artículo de Ricardo Lagos, cuando sostiene que “...como resultado del ocaso de las políticas económicas neoliberales, y de la crisis por que atraviesan las mayorías de las economías latinoamericanas, el rol económico del Estado se verá fortalecido”²³.

Las razones que avalan esta conclusión son muchas: el estado tendrá que seguir atendiendo imposterables necesidades públicas, tanto mayores cuanto más se profundice la crisis que afecta a los capitalismos latinoamericanos. Aparte de los gastos ordinarios que requiere su funcionamiento –para atender a las necesi-

23. Ricardo Lagos, “Crisis, ocaso neoliberal y el rol del Estado”, en *Pensamiento Iberoamericano* N° 5a, Madrid, enero-junio de 1984, p. 165.

dades básicas de salud, educación, vivienda, administración— hace falta también la intervención de los poderes públicos para crear empleo y solucionar el problema de los millones de desocupados que hoy existen en América Latina; para promover la ciencia y la tecnología necesarias para que nuestros países puedan aspirar a integrarse en las nuevas realidades de la economía internacional; para corregir las brutales desigualdades de ingresos y rentas que nos ha dejado la experiencia de capitalismo salvaje de los últimos años; para compensar los abismales desequilibrios regionales originados por la misma causa; para invertir en actividades productivas que estimulen la inversión de burguesías tan desafectas al riesgo empresarial como cada vez más propensas a la especulación rentística y al capitalismo prebendario que todo lo espera del estado.

En un país como la Argentina, cuyo déficit habitacional supera las dos millones de viviendas; donde los hospitales públicos carecen del equipamiento mínimo indispensable para garantizar la salud de la población; donde existen un 40% de deserción escolar y varios millones de analfabetos funcionales; donde la investigación científica languidece, junto a la educación superior, por la bancarrota fiscal; donde el 50% de la población urbana carece de agua corriente y servicios cloacales; donde la administración pública no dispone de los elementos más imprescindibles para realizar su labor; donde maestros, médicos, policías —además de los empleados estatales— ganan sueldos absolutamente miserables: ¿qué sentido tiene hablar de “achicar” el Estado, reducir el déficit fiscal, disminuir los gastos sociales, liquidar los viejos compromisos heredados de las épocas de bonanza?²⁴

El mercado ha demostrado ser completamente inservible para resolver estos problemas, y no porque funcione mal sino porque su misión no es hacer justicia sino producir ganancias. Por eso la iniciativa privada no ha creado sistemas de salud para atender a las clases populares; tampoco hizo nada para asegurar la vivienda a los sectores de menores ingresos; su contribución a la capacitación de la fuerza de trabajo ha sido casi insignificante. Por el contrario, acentuó las tendencias hacia la desigualdad social al promover extraordinarias disparidades en la distribución del ingreso. Además, como si todo lo anterior fuera poco, la iniciativa privada demostró ser sumamente refractaria ante el avance democrático de nuestras sociedades, a resultas de lo cual ha sido más fácil democratizar al Estado que hacer lo propio con distintos ámbitos, supuestamente pluralistas y abiertos, de la sociedad civil. Por todo esto necesitamos del Estado de Bienestar: porque ante el agravamiento de las condiciones sociales imperantes en América Latina nos garantiza no sólo la cobertura —aunque sea parcial e insuficiente— de necesidades humanas básicas sino porque, también, favorecerá el robustecimiento de nuestras frágiles transiciones democráticas.

24. Cf. el punzante artículo de Alejandro Rofman, “En defensa del Estado, del gasto público y del déficit fiscal”, en *Nueva Sión*, 6 de agosto de 1988, p. 6.

Esto no cancela por cierto la necesidad de promover una profunda reforma del Estado. Tan dogmática –y equivocada– resulta la posición neoliberal que exige el desmantelamiento del Estado como aquella que desde el populismo y una cierta izquierda sostiene que no hay nada que objetar en el funcionamiento de los Estados latinoamericanos. Un Estado ineficiente y en bancarrota muy poco puede hacer para favorecer a las clases y capas populares; por el contrario, en esas condiciones sólo sirve a un sector minoritario de nuestras sociedades, que lucra con los subsidios y prebendas que le dispensan gobernantes complacientes. Pero difícilmente se pueda sostener que se reforma el Estado transfiriendo el capital social acumulado por el esfuerzo de varias generaciones a monopolios privados, o desmantelando la legislación reguladora con la cual los poderes públicos ordenaron la anarquía de los mercados. ¿Por qué no concebir la reforma del Estado como una excelente oportunidad para posibilitar el diseño de nuevos mecanismos e instrumentos democráticos que potencien la capacidad de control social sobre la burocracia y los actores privados, motivados por la persecución de sus intereses egoístas? Por eso es de la mayor importancia que el pensamiento progresista de nuestra región encare con seriedad y responsabilidad el tema de la reforma del Estado. Es demasiado importante para ser dejado, sin más, a la derecha. Sin dicha reforma difícilmente será posible hacer realidad la vieja ambición de construir una democracia que sea legítima y apta para responder con eficacia a los retos que impone la dramática situación de América Latina.